ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO RELATIVO A LA COMPETENCIA, LA LEY APLICABLE, EL RECONOCIMIENTO, LA EJECUCIÓN Y LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL Y DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS

PODER EJECUTIVO

EXPEDIENTE N.º 19.806

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

PROYECTO DE LEY

APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO RELATIVO A LA COMPETENCIA, LA LEY APLICABLE, EL RECONOCIMIENTO, LA EJECUCIÓN Y LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL Y DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS

Expediente N.º 19.806

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La presente iniciativa está orientada a implementar y mejorar la protección de los niños, niñas y adolescentes en conflictos cuya resolución puede involucrar sistemas jurídicos de países diferentes, evitando la posibilidad de conflictos entre estos en materia de competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de medidas de protección a favor de dichas personas menores de edad.

La movilidad geográfica de las personas entre diversos países, en los últimos años, producto del desarrollo y crecimiento de los medios de comunicación y de transporte; la supresión del requisito de visas entre países a través de convenios bilaterales; el establecimiento de importantes centros económicos en ciertos países; la inmigración de personas de un país a otro en busca de mejores condiciones económicas, y la globalización, han tenido como consecuencia que, con mucha mayor frecuencia se constituyan parejas o familias de diversas nacionalidades, quienes en muchos casos se establecen en un determinado país a fin de mantener la custodia física de sus hijos, e impedir el acceso del otro progenitor a sus hijos, o bien, ven la adopción internacional, como el primer mecanismo para asegurar el derecho de las personas menores de edad a contar con una familia, con el fin de realizarse como padres.

Tanto la sustracción internacional de personas menores de edad como la adopción internacional conllevan el establecimiento de mecanismos de protección jurídica de los niños, niñas y adolescentes que participan en dichos procesos.

De ahí la importancia que reviste la cooperación internacional para la protección de dichas personas, por ser el interés superior del niño su consideración primordial.

Así las cosas, el presente convenio tiene como propósito fundamental el proporcionar a los Estados que, como el Estado costarricense, comparten el interés común de proteger a las personas menores de edad, de los mecanismos prácticos que le permitan cooperar entre ellos, particularmente en lo que se refiere

a la implementación de los convenios de La Haya sobre protección de personas menores de edad, particularmente el Convenio de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, y el de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, ambos instrumentos debidamente aprobados por nuestro país y cuyas autoridades centrales designadas por Costa Rica son el Patronato Nacional de la Infancia y el Consejo Nacional de Adopciones del Patronato Nacional de la Infancia, respectivamente.

Exponemos la importancia de la adhesión al presente convenio por diferentes motivos. Este convenio expone temas como los de la residencia habitual del niño, resuelve conflictos de competencia nacional e internacional, abarca el tema de la sustracción internacional de la persona menor de edad, expone medidas de protección respecto a los bienes del niño y, además, indica las medidas respectivas de protección en situaciones de urgencia y provisionales. Este convenio también establece el rol de las autoridades centrales en el funcionamiento práctico de este mismo convenio.

Otro punto importante mencionado es el de las comunicaciones judiciales directas, ya que hace referencia a los intercambios entre jueces de distintas jurisdicciones vinculados a un caso con elementos internacionales. Mediante estos intercambios los jueces pueden informarse mutuamente y aprender unos de otros sobre cómo tratar los procedimientos referidos a la aplicación de un convenio internacional y los procedimientos vigentes en cada Estado para las cuestiones por ellos abordadas.

Expuestos los puntos anteriores, cabe mencionar que el convenio de 1996 no modifica ni sustituye el mecanismo establecido por el convenio de 1980 para abordar las situaciones de sustracción internacional de menores. En cambio, el convenio de 1996 suplementa y refuerza el convenio de 1980 en determinados aspectos. Esto significa que una serie de sus disposiciones pueden ser útiles como complemento del mecanismo del convenio de 1980 cuando este se aplica a un caso particular. Asimismo, en los Estados o situaciones donde no se aplica el convenio de 1980, las disposiciones del convenio de 1996 también pueden ser una fuente independiente de recursos de utilidad a efectos de la sustracción internacional de menores.[1]

Otro aspecto destacable del presente convenio es que define la competencia de las autoridades de la residencia habitual del niño. Es importante indicar el concepto de “residencia habitual”, ya que este es el principal punto de conexión y la base para la competencia utilizados en el convenio de La Haya de

[1] Manual práctico sobre el funcionamiento del convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996, Relativo a la Competencia, la ley aplicable, el Reconocimiento, La Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños. En adelante, toda referencia al "Manual práctico", aludirá a este documento.

1996, y cabe destacar también que el uso de la residencia habitual es un punto común a todos los Convenios de La Haya que tratan sobre niños y niñas.

No obstante, ninguno de dichos convenios contiene una definición específica de “residencia habitual” ya que esta tiene que ser determinada por las autoridades pertinentes en cada caso sobre la base de los elementos fácticos y tomando en cuenta la amplitud de circunstancias que puedan presentarse y las restricciones del derecho interno. En la actualidad el punto de conexión “residencia habitual” se ha consolidado como el más efectivo y apropiado para proteger los intereses de los niños y niñas en la mayoría de los casos.

El convenio de 1996 supone que el juez de la residencia habitual del niño es el que se encuentra en mejor disposición para apreciar cuál es el interés superior del niño y, en caso de que no fuera el juez de la residencia habitual el mejor posicionado para rechazar la debida apreciación, se abriría la posibilidad de transferir la competencia a aquel juez que estuviera en condiciones para hacerlo; esto se puede ver tutelado en los artículos 8 y 9 del convenio.

Otro tema de interés que plantea este convenio en el artículo 13 es el de la resolución de conflictos entre distintas autoridades competentes de diversos Estados. Pueden existir casos en los que las autoridades de más de un estado contratante sean competentes para adoptar medidas de protección respecto de un niño o niña, siendo que en caso de que esto suceda, debe abstenerse de ejercer su competencia solo si en el momento de iniciarse el procedimiento se hubieran solicitado las "medidas correspondientes" a las autoridades de otro estado contratante y que además fueran competentes en virtud de los artículos 5 y 10 y esas medidas estuvieran todavía en proceso de examen.[2]

El término "medidas correspondientes" no está definido en el convenio, sin embargo, se entiende que para que se aplique el artículo 13 las peticiones o pretensiones entre ambos estados contratantes deben ser en esencia similares, o ser las mismas.

En el caso de la competencia en materia de sustracción internacional de niños y niñas, y en caso en que exista conflicto positivo de competencias entre las autoridades del país de residencia habitual previo al traslado, y las autoridades del país donde la persona menor de edad haya sido trasladada, el artículo 7 del convenio de 1996 determina que las autoridades de la residencia habitual inmediatamente anterior al traslado conservan la competencia hasta tanto, bajo determinadas condiciones, cambie la residencia habitual del niño.

Se prevé en el artículo 6 una solución a ciertas situaciones de conflictos negativos de competencia, con el motivo de evitar una denegación de justicia. Se trata del caso de niños refugiados o desplazados, o cuando no sea posible

[2] Manual práctico sobre el funcionamiento del convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996.

determinar la residencia habitual del niño, dotándose de competencia a las autoridades del lugar donde se encuentra el niño.

Por otra parte, el tema de la transferencia de competencias se ve desarrollado en los artículos 8 y 9 del convenio de 1996, en los que se especifica que en situaciones excepcionales a las normas generales de competencia, se prevén mecanismos mediante los cuales la competencia para adoptar medidas destinadas a la protección de la persona y de los bienes del niño, puede ser transferida de las autoridades de los Estados contratantes que tienen competencia general en virtud del convenio mencionado, a las autoridades de los Estados contratantes que no la tienen.

Es decir, que en caso de excepción se podría transferir la competencia al Estado que mejor convenga al interés superior del niño.

Sobre las medidas de protección respecto de los bienes de los niños y niñas, el artículo 1 del convenio establece que las medidas para la protección de dichos bienes están comprendidas en el ámbito de aplicación del convenio a “la administración, conservación o disposición de los bienes del niño”. Esta fórmula ha sido explicada y comentada en varios documentos de la Conferencia de La Haya, en los cuales se ha señalado que al incluir la protección de los bienes entre los objetivos del convenio se tuvo por finalidad regular cuestiones relativas a la administración de los bienes que el niño pueda tener en el extranjero y el alcance de los poderes de sus administradores.

En cambio, no se refiere a cuestiones como la calidad de los bienes, los derechos de las partes, la capacidad de adquirirlos, los métodos de transferirlos, o las solemnidades que deben acompañar esos actos, con lo cual no interfiere, por consiguiente, en los sistemas de derecho de propiedad ni abarca el derecho sustantivo relacionado con el contenido de los derechos sobre los bienes, por ejemplo, las controversias respecto del dominio o la titularidad de los bienes.[3]

El artículo 55 del convenio contempla la posibilidad de efectuar una reserva a las normas generales de competencia que establecen la competencia principal de las autoridades del Estado de residencia habitual del niño para adoptar medidas de protección sobre su persona o sus bienes. En tal sentido, permite a los Estados parte reservarse la competencia de sus autoridades para tomar medidas de protección de los bienes de un niño situado en su territorio (artículo 55 1) a) y les otorga el derecho de no reconocer una responsabilidad parental o una medida de protección que sería incompatible con una medida adoptada por sus autoridades en relación con dichos bienes (artículo 55 1) b).

Otro aspecto relevante que prevé el convenio de La Haya de 1996 es la posibilidad de emisión de medidas de protección en situaciones de urgencia. Es decir, las autoridades de cualquier estado contratante en cuyo territorio se

[3] Manual práctico, párr.13.72.

encuentren el niño o los bienes que le pertenezcan son competentes para adoptar las medidas de protección necesarias.[4]

El convenio no prevé una definición autónoma respecto de que constituyen "casos de urgencia". Por lo tanto, corresponderá a las autoridades judiciales/administrativas del Estado contratante en cuestión, determinar si una situación particular es "urgente".

Las medidas de protección que pueden tomarse en situaciones de urgencia tienen el mismo alcance material que las medidas que pueden adoptarse en virtud de los artículos 5 a 10 del convenio (el convenio prevé una lista no exhaustiva en el artículo 3 de las medidas posibles, y en el artículo 4 se prevé una lista exhaustiva de las cuestiones excluidas), y pueden ser extremadamente útiles en diversas situaciones, por ejemplo: i) niños no acompañados, víctimas de tráfico o inmigrantes irregulares, que en numerosas oportunidades requieren una inmediata protección en el lugar donde son encontrados, y una posterior coordinación con las autoridades de su residencia habitual para facilitar una reinserción segura en sus respectivas comunidades; o ii) sustracciones internacionales de niños, para facilitar su regreso seguro, mediante el dictado de las medidas de protección que resultaran necesarias. Inclusive, algunos expertos consideran que estas medidas de protección urgentes podrían proveer también protección al progenitor del niño, en la medida de que dicha protección fuera necesaria para la efectiva protección de este último.

Las medidas urgentes del artículo 11 son distintas a las medidas provisionales del artículo 12, porque las primeras se dan en un contexto de urgencia y, en razón de ello, pueden modificar las medidas tomadas por las autoridades competentes según los arts. 5 a 10 (ello no es posible mediante una medida provisional); además, las medidas urgentes ante una situación de sustracción de niños pueden ser ordenadas por las autoridades del país al cual el niño ha sido desplazado o donde se encuentra retenido, mientras que dichas autoridades, en principio, no pueden dictar medidas provisionales (artículo 7.3).

En otro orden de ideas e independientemente de los casos de urgencia, el artículo 12 prevé un criterio específico de atribución de competencias que permite a las autoridades de un Estado contratante en cuyo territorio se encuentra el niño o los bienes que le pertenezcan, adoptar medidas de carácter provisional para la protección de su persona o sus bienes.

El convenio no prevé una definición de qué puede constituir una medida de "carácter provisional". No obstante, el informe explicativo establece que el artículo 12 se basó en la necesidad de asegurar la protección del niño que se encuentra en un Estado extranjero como consecuencia de una estancia de duración limitada, verbigracia, vacaciones, periodo de estudios breves, cosechas, etc.

[4] Manual práctico, párr. 6.1.

Se debe rescatar también que el convenio distingue el reconocimiento (artículos 23 a 25), la declaración de ejecutabilidad, el registro de las medidas de protección a los fines de su ejecución (artículos 26 y 27) y, finalmente, la ejecución stricto sensu de dichas medidas (artículo 28).

El convenio de 1996, que sigue el criterio imperante en otros convenios de La Haya, flexibiliza los recaudos formales vinculados a la presentación de la solicitud y transmisión de documentación, para facilitar el acceso a la justicia y la protección efectiva de las personas a las cuales busca beneficiar.

El reconocimiento y ejecución de medidas de protección extranjeras en países vecinos o países que forman parte de un área de integración económica se regirá en principio por las normas generales de reconocimiento y ejecución establecidas por el convenio.

El convenio establece el procedimiento de consulta y cooperación entre autoridades que se seguirá cuando se esté considerando la colocación de un niño en una familia de acogida o en un establecimiento o su protección legal por kafala o por una institución análoga, siempre que esta colocación o este acogimiento haya de tener lugar en otro Estado contratante.

El convenio de 1996 contiene, asimismo, disposiciones que pueden ser de asistencia cuando una autoridad judicial o administrativa desea ordenar la restitución de un niño en virtud del convenio de 1980, pero condicionada a que se fijen determinadas medidas urgentes y necesarias para garantizar la restitución segura del niño y la protección del niño en el Estado contratante requirente (hasta tanto las autoridades en el Estado contratante puedan actuar a los fines de proteger al niño). En este sentido, el convenio de 1996 contiene un fundamento específico de competencia que, cuando el caso sea de urgencia, le permite al Estado contratante requerido adoptar "medidas de protección necesarias" respecto del niño. El convenio de 1996 agrega a la eficacia de cualquier otra medida de protección ordenada al garantizar que dichas órdenes sean reconocidas de pleno derecho en el Estado contratante al cual se debe restituir al niño y sean ejecutorias en ese Estado contratante a petición de cualquiera de las partes interesadas (hasta el momento en que las autoridades en el Estado contratante requirente puedan fijar las medidas de protección necesarias).[5]

El convenio de 1996, asimismo, puede asistir en las cuestiones de visitas/contactos provisionales en los casos de sustracción cuando los procedimientos de restitución en virtud del convenio de 1980 se encuentren pendientes de resolución. Cuando el Estado contratante de la residencia habitual del niño no está en condiciones de abordar la visita/contacto provisional y cuando el caso reviste carácter de urgencia, el artículo 11 del convenio puede proporcionar un fundamento para que las autoridades del Estado contratante que entiendan en los procedimientos de restitución puedan expedir dicha orden. Esta

[5] Manual práctico, párr. 13.7.

orden cesará de producir efectos una vez que las autoridades del Estado contratante de la residencia habitual del niño hayan adoptado las medidas de protección necesarias en este sentido.[6]

Asimismo, fuera de las situaciones de sustracción de niños, el convenio de 1980 ha demostrado tener ciertas limitaciones cuando el peticionante solicita, por medio del artículo 21 de este convenio, que le fijen o le reconozcan sus derechos de visita en el extranjero, lo cual prueba de nuevo la necesidad de mecanismos como los del convenio de 1996 para ser implementados en la legislación costarricense.

En este sentido, el convenio de 1996 puede ser de gran utilidad, pues su artículo 35 está dedicado específicamente a la cooperación en los casos de derecho de visita/contacto internacionales, poniendo a disposición el sistema de cooperación del convenio para la puesta en práctica de medidas de protección tendientes a asegurar el ejercicio efectivo de un derecho de visita que hubiera sido establecido en virtud del convenio. Además, incorpora un novedoso mecanismo para la obtención de pruebas en el extranjero, el cual seguramente facilitará el acceso a la justicia de las personas que residan en un país distinto al del foro.[7]

La aprobación del convenio de La Haya de 1996 por parte de nuestro país, sin lugar a dudas, vendrá a reforzar el marco jurídico que protege a las personas menores de edad; en este caso en particular, a aquellas cuya protección pueda requerir la implementación de medidas de protección por parte de autoridades de sistemas jurídicos de diversos Estados, con lo cual se complementa y fortalece la implementación práctica de los otros convenios de La Haya aprobados por Costa Rica, como lo son, el de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y el de 1993 sobre Cooperación en Materia de Adopción Internacional.

En virtud de lo anterior, sometemos a conocimiento de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley adjunto, referido a la **Aprobación de la Adhesión al Convenio Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños,** para su respectiva aprobación legislativa.

---

6 Manual práctico, párr. 13.8.

7 "El artículo 35 prevé, asimismo, un mecanismo para que el progenitor que vive en un Estado contratante distinto del estado del niño pueda solicitar a las autoridades en su propio Estado recabar informaciones o pruebas y pronunciarse sobre la aptitud de este progenitor para ejercer el derecho de visita/contacto y sobre las condiciones en las que podría ejercerlo. Estas informaciones, pruebas o conclusiones deberán ser consideradas por las autoridades competentes al momento de adoptar una decisión relativa al derecho de visita/contacto respecto del niño". Manual práctico, párr. 13.18.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO RELATIVO A LA COMPETENCIA, LA LEY APLICABLE, EL RECONOCIMIENTO, LA EJECUCIÓN Y LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL Y DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS

ARTÍCULO ÚNICO: Apruébese en cada una de sus partes el **Convenio Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños,** hecho en la Haya el 19 de octubre de 1996, cuyo texto es el siguiente:

Convenio Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños

(hecho el 19 de octubre de 1996)

Los Estados signatarios del presente Convenio,

Considerando que conviene mejorar la protección de los niños en las situaciones de carácter internacional,

Deseando evitar conflictos entre sus sistemas jurídicos en materia de competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de medidas de protección de los niños,

Recordando la importancia de la cooperación internacional para la protección de los niños,

Confirmando que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial,

Constatando la necesidad de revisar el Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre Competencia de Autoridades y Ley Aplicable en materia de Protección de Menores,

Deseando establecer disposiciones comunes a tal fin, teniendo en cuenta el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, del 20 de noviembre de 1989,

Han acordado las disposiciones siguientes:

CAPÍTULO I – ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO

Artículo 1

1. El presente Convenio tiene por objeto:

a) determinar el Estado cuyas autoridades son competentes para tomar las medidas de protección de la persona o de los bienes del niño;

b) determinar la ley aplicable por estas autoridades en el ejercicio de su competencia;

c) determinar la ley aplicable a la responsabilidad parental;

d) asegurar el reconocimiento y la ejecución de tales medidas de protección en todos los Estados contratantes;

e) establecer entre las autoridades de los Estados contratantes la cooperación necesaria para lograr los objetivos del Convenio.

2. Para los propósitos del Convenio, la expresión "responsabilidad parental" incluye la autoridad parental o cualquier otra relación de autoridad análoga que determine los derechos, poderes y obligaciones de los padres, tutores o de otro representante legal respecto a la persona o los bienes del niño.

Artículo 2

El Convenio se aplica a los niños a partir de su nacimiento y hasta que alcancen la edad de 18 años.

Artículo 3

Las medidas previstas en el artículo primero pueden referirse en particular a:

a) la atribución, ejercicio y cese total o parcial de la responsabilidad parental, así como su delegación;

b) la guarda, incluyendo el derecho relativo al cuidado de la persona del niño y, en particular, la autoridad para decidir sobre su lugar de residencia, así como el derecho de visita, incluyendo el derecho de trasladar al niño durante un periodo limitado de tiempo a un lugar distinto del de su residencia habitual;

c) la tutela, la curatela y otras instituciones análogas;

d) la designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse de la persona o de los bienes del niño, de representarlo o de asistirlo;

e) la colocación del niño en una familia sustituta o en un lugar de cuidado institucionalizado, o su protección legal mediante *kafala* o mediante una institución similar;

f) la supervisión por parte de una autoridad pública del cuidado dispensado al niño por toda persona que lo tenga a su cargo;

g) la administración, conservación o disposición de los bienes del niño.

Artículo 4

Están excluidos del ámbito del Convenio:

a) el establecimiento y la impugnación de la relación filial;

b) la decisión sobre la adopción y las medidas preparatorias para la adopción, así como la anulación y la revocación de la adopción;

c) el nombre y apellidos del niño;

d) la emancipación;

e) las obligaciones alimenticias

f) los *trusts* o las sucesiones;

g) la seguridad social;

h) las medidas públicas de carácter general en materia de educación y salud;

i) las medidas adoptadas como consecuencia de infracciones penales cometidas por los niños;

j) las decisiones sobre el derecho de asilo y en materia de inmigración.

CAPÍTULO II – COMPETENCIA

Artículo 5

1. Las autoridades, tanto judiciales como administrativas, del Estado contratante de la residencia habitual del niño son competentes para adoptar las medidas para la protección de su persona o de sus bienes.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, en caso de cambio de la residencia habitual del niño a otro Estado contratante, son competentes las autoridades del Estado de la nueva residencia habitual.

Artículo 6

1. Para los niños refugiados y aquellos niños que, como consecuencia de disturbios en sus respectivos países, están internacionalmente desplazados, las autoridades del Estado contratante en cuyo territorio se encuentran como consecuencia del desplazamiento ejercen la competencia prevista en el apartado primero del artículo 5.

2. La disposición del apartado precedente se aplica también a los niños cuya residencia habitual no pueda determinarse.

Artículo 7

1. En caso de desplazamiento o retención ilícitos del niño, las autoridades del Estado contratante en el que el niño tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su desplazamiento o su retención conservan la competencia hasta el momento en que el niño adquiera una residencia habitual en otro Estado y:

a) toda persona, institución u otro organismo que tenga la guarda dé su consentimiento al desplazamiento o a la retención; o

b) el niño haya residido en este otro Estado por un periodo de al menos un año desde que la persona, institución o cualquier otro organismo que tenga la guardia tenga o deba haber tenido conocimiento del paradero del niño, sin que se encuentre todavía pendiente petición alguna de retorno presentada en este plazo, y el niño se hubiera integrado en su nuevo medio.

2. El desplazamiento o la retención del niño se considera ilícito:

a) cuando se haya producido con infracción de un derecho de guarda, atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución o a cualquier otro organismo, según lo dispuesto en la legislación vigente en el Estado en que el niño tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o de su retención; y

b) este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del desplazamiento o de la retención, o hubiera sido ejercido si no se hubiera producido el desplazamiento.

El derecho de guarda a que se refiere la letra *a)* puede resultar, en particular, como resultado de una atribución de pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente de acuerdo con la legislación de dicho Estado.

3. Mientras las autoridades mencionadas en el apartado primero conserven su competencia, las autoridades del Estado contratante al que el niño ha sido desplazado o donde se encuentra retenido solamente pueden tomar las medidas

urgentes necesarias para la protección de la persona o los bienes del niño, de acuerdo con el artículo 11.

Artículo 8

1. Excepcionalmente, si la autoridad del Estado contratante competente según los artículos 5 ó 6, estima que la autoridad de otro Estado contratante está en mejor situación para determinar, en un caso particular, el interés superior del niño, puede

- solicitar a esta autoridad, directamente o con la colaboración de la Autoridad Central de este Estado, que acepte la competencia para adoptar las medidas de protección que estime necesarias, o

- suspender la decisión sobre el caso e invitar a las partes a presentar tal petición ante la autoridad de este otro Estado.

2. Los Estados contratantes cuya autoridad puede ser requerida en las condiciones previstas en el apartado precedente son:

a) un Estado del cual el niño posea la nacionalidad;

b) un Estado en que estén localizados bienes del niño;

c) un Estado en el que se esté conociendo de una demanda de divorcio o separación legal de los padres del niño o de anulación de su matrimonio;

d) un Estado con el cual el niño tenga algún vínculo importante.

3. Las autoridades interesadas pueden proceder a un intercambio de opiniones.

4. La autoridad requerida en las condiciones previstas en el apartado primero puede aceptar la competencia, en lugar de la autoridad competente según los artículos 5 ó 6, si considera que ello responde al interés superior del niño.

Artículo 9

1. Si las autoridades de los Estados contratantes mencionados en el artículo 8, apartado 2, estiman que están en mejor situación para determinar, en un caso particular, el interés superior del niño, pueden ya sea

- solicitar a la autoridad competente del Estado contratante de la residencia habitual del niño, directamente o con la cooperación de la Autoridad Central de este Estado, que les permita ejercer su competencia para adoptar las medidas de protección que estimen necesarias, o ya sea

- invitar a las partes a presentar dicha petición ante las autoridades del Estado contratante de la residencia habitual del niño.

2. Las autoridades interesadas pueden proceder a un intercambio de opiniones.

3. La autoridad que ha originado la petición sólo puede ejercer su competencia en lugar de la autoridad del Estado contratante de la residencia habitual del niño si esta autoridad ha aceptado la petición.

Artículo 10

1. Sin perjuicio de los artículos 5 a 9, las autoridades de un Estado contratante, en el ejercicio de su competencia para resolver una demanda de divorcio o separación legal de los padres de un niño con residencia habitual en otro Estado contratante o en anulación de su matrimonio, pueden adoptar, si la ley de su Estado lo permite, medidas de protección de la persona o de los bienes del niño, si:

a) uno de los padres reside habitualmente en dicho Estado en el momento de iniciarse el procedimiento y uno de ellos tiene la responsabilidad parental respecto al niño, y

b) la competencia de estas autoridades para adoptar tales medidas ha sido aceptada por los padres, así como por cualquier otra persona que tenga la responsabilidad parental respecto al niño, y si esta competencia responde al interés superior del niño.

2. La competencia prevista en el apartado primero para adoptar medidas de protección del niño cesa cuando la decisión aceptando o desestimando la demanda de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio sea firme o el procedimiento finaliza por otro motivo.

Artículo 11

1. En casos de urgencia, son competentes para adoptar las medidas de protección necesarias las autoridades de cualquier Estado contratante en cuyo territorio se encuentre el niño o bienes que le pertenezcan.

2. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado precedente respecto de un niño que tuviera su residencia habitual en un Estado contratante, dejan de tener efecto desde que las autoridades competentes en virtud de los artículos 5 a 10 adopten las medidas exigidas por la situación.

3. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado primero respecto de un niño que tenga su residencia habitual en un Estado no contratante dejan de tener efecto en todo Estado contratante desde el momento que las medidas exigidas por

la situación y adoptadas por las autoridades de otro Estado se reconocen en el Estado contratante en cuestión.

Artículo 12

1. Sin perjuicio del artículo 7, son competentes para adoptar medidas de protección de la persona o bienes del niño, con carácter provisional y eficacia territorial restringida a este Estado, las autoridades del Estado contratante en cuyo territorio se encuentre el niño o bienes que le pertenezcan, en tanto que tales medidas no sean incompatibles con las ya adoptadas por las autoridades competentes según los artículos 5 a 10.

2. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado precedente respecto a un niño que tenga su residencia habitual en un Estado contratante dejan de surtir efecto desde el momento en que las autoridades competentes en virtud de los artículos 5 a 10 se hayan pronunciado sobre las medidas de protección que pueda exigir la situación.

3. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado primero respecto de un niño que tenga su residencia habitual en un Estado no contratante dejan de surtir efecto en el Estado contratante en que fueron adoptadas desde el momento en que se reconocen las medidas exigidas por la situación, adoptadas por las autoridades de otro Estado.

Artículo 13

1. Las autoridades de un Estado contratante que sean competentes para adoptar medidas de protección de la persona o de los bienes del niño según los artículos 5 a 10, deben abstenerse de ejercer su competencia si, en el momento de iniciarse el procedimiento, se hubieran solicitado las medidas correspondientes a las autoridades de otro Estado contratante que fueran competentes en virtud de los artículos 5 a 10 en el momento de la petición y estuvieran todavía en proceso de examen.

2. La disposición del apartado precedente no se aplica si las autoridades ante las que se presentó inicialmente la petición de medidas han declinado su competencia.

Artículo 14

Las medidas adoptadas en aplicación de los artículos 5 a 10 continúan en vigor en sus propios términos, incluso cuando un cambio de las circunstancias ha hecho desaparecer la base sobre la que se fundaba la competencia, en tanto que las autoridades competentes en virtud del Convenio no las hayan modificado, reemplazado o dejado sin efecto.

CAPÍTULO III - LEY APLICABLE

Artículo 15

1. En el ejercicio de la competencia atribuida por las disposiciones del Capítulo II, las autoridades de los Estados contratantes aplican su propia ley.

2. No obstante, en la medida en que la protección de la persona o de los bienes del niño lo requiera, pueden excepcionalmente aplicar o tomar en consideración la ley de otro Estado con el que la situación tenga un vínculo importante.

3. En caso de cambio de la residencia habitual del niño a otro Estado contratante, la ley de este otro Estado rige las condiciones de aplicación de las medidas adoptadas en el Estado de la anterior residencia habitual a partir del momento en que se produce el cambio.

Artículo 16

1. La atribución o la extinción de pleno derecho de la responsabilidad parental, sin intervención de una autoridad judicial o administrativa, se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del niño.

2. La atribución o la extinción de la responsabilidad parental en virtud de un acuerdo o de un acto unilateral, sin intervención de una autoridad judicial o administrativa, se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del niño en el momento en que entra en vigor el acuerdo o el acto unilateral.

3. La responsabilidad parental existente según la ley del Estado de la residencia habitual del niño subsiste después del cambio de esta residencia habitual a otro Estado.

4. En caso de cambio de la residencia habitual del niño, la atribución de pleno derecho de la responsabilidad parental a una persona que no estuviera ya investida de tal responsabilidad se rige por la ley del Estado de la nueva residencia habitual.

Artículo 17

El ejercicio de la responsabilidad parental se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del niño. En caso de cambio de la residencia habitual del niño, se rige por la ley del Estado de la nueva residencia habitual.

Artículo 18

Podrá privarse de la responsabilidad parental a que se refiere el artículo 16 o modificarse las condiciones de su ejercicio mediante medidas adoptadas en aplicación del Convenio.

Artículo 19

1. No puede impugnarse la validez de un acto celebrado entre un tercero y una persona que tendría la condición de representante legal según la ley del Estado en que se ha celebrado el acto, ni declararse la responsabilidad del tercero, por el único motivo de que dicha persona no tuviera la condición de representante legal en virtud de la ley designada por las disposiciones del presente Capítulo, salvo que el tercero supiera o debiera haber sabido que la responsabilidad parental se regía por esta ley.

2. El apartado precedente sólo se aplica si el acto se ha celebrado entre personas presentes en el territorio de un mismo Estado.

Artículo 20

Las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán incluso si designan la ley de un Estado no contratante.

Artículo 21

1. Para efectos del presente capítulo, se entenderá por "ley" el Derecho vigente en un Estado, con exclusión de sus normas de conflicto de leyes.

2. No obstante, si la ley aplicable en virtud del artículo 16 fuera la de un Estado no contratante y las normas de conflicto de leyes de dicho Estado remitieran a la ley de otro Estado no contratante que aplicaría su propia ley, la ley aplicable será la de este último Estado. Si este otro Estado no contratante no aplicara su propia ley, se aplicará la ley designada por el art. 16.

Artículo 22

La aplicación de la ley designada por las disposiciones del presente Capítulo sólo puede excluirse si es manifiestamente contraria al orden público, teniendo en cuenta el interés superior del niño.

CAPÍTULO IV - RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN

Artículo 23

1. Las medidas adoptadas por las autoridades de un Estado contratante se reconocerán de pleno derecho en los demás Estados contratantes.

2. No obstante, el reconocimiento podrá denegarse:

a) si la medida se ha adoptado por una autoridad cuya competencia no estuviera fundada en uno de los criterios previstos en el Capítulo II;

b) si, excepto en caso de urgencia, la medida se ha adoptado en el marco de un procedimiento judicial o administrativo, en el que el niño no ha tenido la posibilidad de ser oído, en violación de principios fundamentales de procedimiento del Estado requerido;

c) a petición de toda persona que aduce que la medida atenta contra su responsabilidad parental, si, excepto en caso de urgencia, la medida se ha adoptado sin que dicha persona haya tenido la posibilidad de ser oída;

d) si el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del Estado requerido, teniendo en cuenta el interés superior del niño;

e) si la medida es incompatible con una medida adoptada posteriormente en el Estado no contratante de la residencia habitual del niño, cuando esta última medida reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido;

f) si no se ha respetado el procedimiento previsto en el art. 33.

Artículo 24

Sin perjuicio del artículo 23, apartado primero, toda persona interesada puede solicitar a las autoridades competentes de un Estado contratante que decidan acerca del reconocimiento o no reconocimiento de una medida adoptada en otro Estado contratante. El procedimiento se rige por la ley del Estado requerido.

Artículo 25

La autoridad del Estado requerido está sujeta a las constataciones de hecho sobre las que la autoridad del Estado que ha adoptado la medida haya fundado su competencia.

Artículo 26

1. Si las medidas adoptadas en un Estado contratante y ejecutorias en el mismo requieren actos de ejecución en otro Estado contratante, serán declaradas ejecutorias o registradas para los fines de ejecución en este otro Estado, a petición de cualquier parte interesada, según el procedimiento previsto por la ley de este Estado.

2. Cada Estado contratante aplicará un procedimiento simple y rápido para la declaración de exequátur o al registro.

3. La declaración de exequátur o el registro pueden denegarse solamente por uno de los motivos previstos en el artículo 23, apartado 2.

Artículo 27

Sin perjuicio de la revisión necesaria en aplicación de los artículos precedentes, la autoridad del Estado requerido no procederá a revisión alguna en cuando al fondo de la medida adoptada.

Artículo 28

Las medidas adoptadas en un Estado contratante, declaradas ejecutorias o registradas para los fines de ejecución en otro Estado contratante, se ejecutarán como si hubiesen sido tomadas por las autoridades de este otro Estado. La ejecución se realizará conforme a la ley del Estado requerido en la medida prevista por dicha ley, teniendo en cuenta el interés superior del niño.

CAPÍTULO V – COOPERACIÓN

Artículo 29

1. Todo Estado contratante designará una Autoridad Central encargada de dar cumplimiento a las obligaciones que este Convenio le impone.

2. Un Estado federal, un Estado en el que están en vigor varios sistemas jurídicos o un Estado con unidades territoriales autónomas puede designar más de una Autoridad Central y especificar la extensión territorial o personal de sus atribuciones. El Estado que haga uso de esta facultad, designará la Autoridad Central a la que puede dirigirse toda comunicación para su transmisión a la Autoridad Central competente dentro de ese Estado.

Artículo 30

1. Las Autoridades Centrales deberán cooperar entre ellas y promover la colaboración entre las autoridades competentes de sus respectivos Estados para alcanzar los objetivos del Convenio.

2. Dichas autoridades adoptarán, en el marco de la aplicación del Convenio, las disposiciones apropiadas para proporcionar informaciones sobre su legislación, así como sobre los servicios disponibles en sus respectivos Estados en materia de protección del niño.

Artículo 31

La Autoridad Central de un Estado contratante tomará, ya sea directamente o a través de autoridades públicas o de otros organismos, todas las medidas apropiadas para:

a) facilitar las comunicaciones y ofrecer la asistencia previstas en los artículos 8 y 9 y en el presente Capítulo;

b) facilitar por la mediación, la conciliación o cualquier otro procedimiento similar, soluciones acordadas para la protección de la persona o de los bienes del niño, en las situaciones a las que se aplica la Convención;

c) ayudar, a petición de una autoridad competente de otro Estado contratante, a localizar al niño cuando parezca que éste se encuentra en el territorio del Estado requerido y necesita protección.

Artículo 32

A petición razonada de la Autoridad Central o de otra autoridad competente de un Estado contratante con el que el niño tenga un vínculo importante, la Autoridad Central del Estado contratante en que el niño tenga su residencia habitual y en el que el niño se encuentre físicamente presente, puede, sea directamente, o sea con el concurso de autoridades públicas o de otros organismos,

a) proporcionar un informe sobre la situación del niño;

b) solicitar a la autoridad competente de su Estado que considere la oportunidad de adoptar medidas para la protección de la persona o de los bienes del niño.

Artículo 33

1. Cuando la autoridad competente en virtud de los artículos 5 a 10 prevea la colocación del niño en una familia sustituta o en protección institucional o su protección legal por *kafala* o por una institución similar, y esta colocación o esta provisión de protección haya de tener lugar en otro Estado contratante, consultará previamente a la Autoridad Central o a otra autoridad competente de este último Estado. Para este efecto le transmitirá un informe sobre el niño y los motivos de su propuesta sobre la colocación o la provisión de protección respectiva.

2. El Estado requirente sólo puede adoptar la decisión sobre la colocación o la provisión de protección si la Autoridad Central u otra autoridad competente del Estado requerido ha aprobado esta colocación o esta provisión de protección, teniendo en cuenta el interés superior del niño.

Artículo 34

1. Cuando se considere una medida de protección, las autoridades competentes en virtud del Convenio pueden, si la situación del niño lo exige, solicitar que toda autoridad de otro Estado contratante que tenga informaciones relevantes a la protección del niño les transmita tales informaciones.

2. Todo Estado contratante podrá declarar que las solicitudes previstas en el apartado primero sólo podrán realizarse a través de su Autoridad Central.

Artículo 35

1. Las autoridades competentes de un Estado contratante pueden pedir a las autoridades de otro Estado contratante que les presten su asistencia para la puesta en práctica de las medidas de protección adoptadas en aplicación del Convenio, en particular para asegurar el ejercicio efectivo de un derecho de visita, así como el derecho a mantener contactos directos regulares.

2. Las autoridades de un Estado contratante en el que el niño no tenga su residencia habitual pueden, a petición de un progenitor que resida en este Estado y desee obtener o conservar un derecho de visita, recabar informaciones o pruebas y pronunciarse sobre la aptitud de este progenitor para ejercer el derecho de visita y sobre las condiciones en las que podría ejercerlo. La autoridad competente para decidir sobre el derecho de visita en virtud de los artículos 5 a 10 deberá, antes de pronunciarse, admitir y tomar en consideración estas informaciones, pruebas o conclusiones.

3. Una autoridad competente para decidir sobre el derecho de visita en virtud de los artículos 5 a 10 puede suspender el procedimiento hasta que se resuelva sobre la solicitud hecha de acuerdo con el apartado 2, particularmente cuando se le haya presentado una solicitud para modificar o suprimir el derecho de visita concedido por las autoridades del Estado de la antigua residencia habitual.

4. Las disposiciones de este artículo no impiden que una autoridad competente en virtud de los artículos 5 a 10 tome medidas provisionales hasta que se resuelva sobre la solicitud hecha de acuerdo con el apartado 2.

Artículo 36

En caso de que el niño esté expuesto a un grave peligro, las autoridades competentes del Estado contratante en el que se hayan adoptado o estén bajo consideración medidas de protección de este niño, avisarán, si son informadas del

cambio de residencia o de la presencia del niño en otro Estado, a las autoridades de este Estado acerca del peligro y de las medidas adoptadas o en curso de consideración.

Artículo 37

Una autoridad no puede solicitar o transmitir informaciones en aplicación de este Capítulo si considera que tal solicitud o transmisión podría poner en peligro la persona o los bienes del niño o constituir una amenaza grave para la libertad o la vida de un miembro de su familia.

Artículo 38

1. Sin perjuicio de la posibilidad de reclamar los gastos razonables correspondientes a los servicios prestados, las Autoridades Centrales y las demás autoridades públicas de los Estados contratantes asumirán sus costos derivados de la aplicación de las disposiciones del presente Capítulo.

2. Todo Estado contratante puede concluir acuerdos con otro o varios Estados contratantes sobre la distribución de los costos.

Artículo 39

Todo Estado contratante podrá concluir acuerdos con otro o varios Estados contratantes para mejorar la aplicación del presente Capítulo en sus relaciones recíprocas. Los Estados que hayan concluido tales acuerdos transmitirán una copia al depositario del Convenio.

CAPÍTULO VI - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 40

1. Las autoridades del Estado contratante de la residencia habitual del niño o del Estado contratante en que se ha adoptado una medida de protección podrán expedir un certificado al titular de la responsabilidad parental o a toda otra persona a quien se haya confiado la protección de la persona o de los bienes del niño, a petición suya, indicando su condición y los poderes que le han sido atribuidos.

2. La condición y los poderes indicados por el certificado se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario.

3. Cada Estado contratante designará las autoridades competentes para expedir el certificado.

Artículo 41

Los datos personales que se hubieran obtenido o transmitido conforme al Convenio, no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos para los que se obtuvieron o transmitieron.

Artículo 42

Las autoridades a las que se transmitan informaciones, garantizarán su confidencialidad conforme a la ley de su Estado.

Artículo 43

Los documentos transmitidos o expedidos en aplicación de este Convenio estarán exentos de legalización o cualquier otra formalidad similar.

Artículo 44

Todo Estado contratante podrá designar las autoridades a las que deben dirigirse las solicitudes previstas en los artículos 8, 9 y 33.

Artículo 45

1. Las designaciones a las que se refieren los artículos 29 y 44 se comunicarán a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

2. La declaración a que se refiere el artículo 34, apartado 2, se hará al depositario del Convenio.

Artículo 46

Un Estado contratante en el que se aplican sistemas jurídicos o conjuntos de normas diferentes en materia de protección del niño y de sus bienes no está obligado a aplicar las normas del Convenio a los conflictos únicamente relacionados con estos diferentes sistemas o conjuntos de reglas.

Artículo 47

En relación a un Estado en el que dos o más sistemas jurídicos o conjuntos de reglas relativas a las cuestiones reguladas en el presente Convenio se aplican en unidades territoriales diferentes:

1. Cualquier referencia a la residencia habitual en este Estado se interpretará como una referencia a la residencia habitual en una unidad territorial.

2. Cualquier referencia a la presencia del niño en este Estado se interpretará como una referencia a la presencia del niño en una unidad territorial.

3. Cualquier referencia a la ubicación de los bienes del niño en este Estado se interpretará como una referencia a la ubicación de los bienes del niño en una unidad territorial.

4. Cualquier referencia al Estado del que el niño posee la nacionalidad se interpretará como una referencia a la unidad territorial designada por la ley de este Estado o, en ausencia de reglas pertinentes, a la unidad territorial con la que el niño presente el vínculo más estrecho.

5. Cualquier referencia al Estado en el que se presenta a una autoridad una demanda de divorcio o separación legal de los padres del niño o en anulación de su matrimonio, se interpretará como una referencia a la unidad territorial en la que se presenta dicha demanda a una autoridad.

6. Cualquier referencia al Estado con el que el niño presenta un vínculo estrecho se interpretará como una referencia a la unidad territorial con la que el niño presenta este vínculo.

7. Cualquier referencia al Estado al que el niño ha sido trasladado o retenido se interpretará como una referencia a la unidad territorial a la que el niño haya sido desplazado o en donde haya sido retenido.

8. Cualquier referencia a los organismos o autoridades de este Estado, diferentes de las Autoridades Centrales, se interpretará como una referencia a los organismos o autoridades habilitados para actuar en la unidad territorial afectada.

9. Cualquier referencia a la ley, el procedimiento o la autoridad del Estado en que la medida ha sido adoptada se interpretará como una referencia a la ley, el procedimiento o la autoridad de la unidad territorial en la que dicha medida ha sido adoptada.

10. Cualquier referencia a la ley, el procedimiento o la autoridad del Estado requerido se interpretará como una referencia a la ley, el procedimiento o la autoridad de la unidad territorial en la que se invoca el reconocimiento o la ejecución.

Artículo 48

Para determinar la ley aplicable en virtud del Capítulo III, en el caso de que un Estado comprenda dos o más unidades territoriales, cada una de las cuales posea su propio sistema jurídico o un conjunto de reglas relativas a las cuestiones reguladas por el presente Convenio, se aplican las reglas siguientes:

a) en el caso de que en dicho Estado existan normas vigentes que identifiquen la unidad territorial cuya ley deberá ser aplicada, se aplicará dicha ley;

b) en defecto de tales normas, se aplicará la ley de la unidad territorial determinada según las disposiciones del artículo 47.

Artículo 49

Para los fines de determinar la ley aplicable en virtud del Capítulo III, cuando un Estado tenga, para las cuestiones reguladas por el presente Convenio, dos o más sistemas jurídicos o conjuntos de reglas aplicables a categorías diferentes de personas, se aplicarán las reglas siguientes:

a) en el caso de que en dicho Estado existan normas vigentes que identifiquen cuál de estas leyes es aplicable, se aplicará esta ley;

b) a falta de tales normas, se aplicará la ley del sistema o del conjunto de reglas con el que el niño presente el vínculo más estrecho.

Artículo 50

El presente Convenio no afecta al *Convenio del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos civiles de la Sustracción Internacional de Menores*, en las relaciones entre las Partes en ambos Convenios. Nada impide, sin embargo, que se invoquen disposiciones del presente Convenio para obtener el retorno de un niño que ha sido ilícitamente desplazado o retenido, o para organizar el derecho de visita.

Artículo 51

En las relaciones entre los Estados contratantes, el presente Convenio sustituye al *Convenio del 5 de octubre de 1961 sobre Competencia de Autoridades y Ley Aplicable en materia de Protección de Menores y al Convenio para Regular la Tutela de los Menores*, firmado en La Haya el 12 de junio de 1902, sin perjuicio del reconocimiento de las medidas adoptadas según el Convenio del 5 de octubre de 1961 antes citado.

Artículo 52

1. El Convenio no afectará los instrumentos internacionales en que los Estados contratantes sean partes y que contengan disposiciones sobre materias reguladas por el presente Convenio, salvo declaración en contrario de los Estados vinculados por dichos instrumentos.

2. El Convenio no afectará a la posibilidad para uno o varios Estados contratantes de concluir acuerdos que contengan disposiciones sobre las materias reguladas por el presente Convenio, respecto a niños que tengan su residencia habitual en uno de los Estados parte en tales acuerdos.

3. Los acuerdos a concluir por uno o varios Estados contratantes sobre materias reguladas por este Convenio no afectarán la aplicación de las disposiciones del presente Convenio en las relaciones de estos Estados con los demás Estados contratantes.

4. Los apartados precedentes se aplicarán igualmente a las leyes uniformes basadas en la existencia entre los Estados afectados de vínculos especiales**,** particularmente de naturaleza regional, u otra naturaleza.

Artículo 53

1. El Convenio se aplicará tan sólo a las medidas adoptadas en un Estado después de la entrada en vigor del Convenio para dicho Estado.

2. El Convenio se aplicará al reconocimiento y a la ejecución de las medidas adoptadas después de su entrada en vigor en las relaciones entre el Estado en que se han adoptado las medidas y el Estado requerido.

Artículo 54

1. Toda comunicación a la Autoridad Central o a cualquier otra autoridad de un Estado contratante se dirigirá en la lengua original y acompañada de una traducción a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales de este Estado o, cuando esta traducción sea difícilmente realizable, de una traducción al francés o al inglés.

2. No obstante, un Estado contratante podrá oponerse a la utilización ya sea del francés, o ya sea del inglés, pero no a ambos, haciendo la reserva prevista en el artículo 60.

Artículo 55

1. Cualquier Estado contratante podrá, conforme al artículo 60:

a) reservarse la competencia de sus autoridades para tomar medidas de protección de los bienes de un niño situados en su territorio;

b) reservarse el derecho de no reconocer una responsabilidad parental o una medida que sería incompatible con una medida adoptada por sus autoridades en relación a dichos bienes.

2. La reserva podrá restringirse a determinadas categorías de bienes.

Artículo 56

El Secretario General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado convocará periódicamente una Comisión especial para examinar el funcionamiento práctico del Convenio.

CAPÍTULO VII - CLÁUSULAS FINALES

Artículo 57

1. El Convenio está abierto a la firma de los Estados que fueren miembros de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de celebrarse su Decimoctava Sesión.

2. Será ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, depositario del Convenio.

Artículo 58

1. Cualquier otro Estado podrá adherirse al Convenio después de su entrada en vigor en virtud del artículo 61, apartado 1.

2. El instrumento de adhesión se depositará en poder del depositario.

3. La adhesión sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los Estados contratantes que no hubiesen formulado objeción a la adhesión en los seis meses siguientes a la recepción de la notificación a que se refiere el artículo 63, apartado *b*). Podrá asimismo formular una objeción al respecto cualquier Estado en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del Convenio posterior a la adhesión. Dichas objeciones serán notificadas al depositario del Convenio.

Artículo 59

1. Cuando un Estado comprenda dos o más unidades territoriales en las que se apliquen sistemas jurídicos diferentes en lo que se refiere a cuestiones reguladas por el presente Convenio, podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que el Convenio se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o varias de ellas y podrá en cualquier momento modificar esta declaración haciendo otra nueva.

2. Toda declaración de esta naturaleza será notificada al depositario del Convenio y en ella se indicarán expresamente las unidades territoriales a las que el Convenio será aplicable.

3. En el caso de que un Estado no formule declaración alguna al amparo del presente artículo, el Convenio se aplicará a la totalidad del territorio de dicho Estado.

Artículo 60

1. Cualquier Estado contratante podrá, a más tardar en el momento de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o en el momento de una declaración hecha en virtud del artículo 59, hacer una o ambas reservas previstas en los artículos 54, apartado 2, y 55. Ninguna otra reserva será admitida.

2. Cualquier Estado podrá, en cualquier momento, retirar una reserva que hubiera hecho. Este retiro se notificará al depositario.

3. La reserva dejará de surtir efecto el día primero del tercer mes posterior a la notificación mencionada en el apartado precedente.

Artículo 61

1. El Convenio entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después del depósito del tercer instrumento de ratificación, de aceptación o de aprobación previsto por el artículo 57.

2. En lo sucesivo, el Convenio entrará en vigor:

a) para cada Estado que lo ratifique, acepte o apruebe posteriormente, el día primero del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses después del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;

b) para cada Estado que se adhiera, el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la expiración del plazo de seis meses previsto en el artículo 58, apartado 3;

c) para las unidades territoriales a las que se haya hecho extensiva la aplicación del Convenio de conformidad con el artículo 59, el día primero del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses después de la notificación prevista en dicho artículo.

Artículo 62

1. Cualquier Estado parte en el presente Convenio podrá denunciarlo mediante notificación por escrito dirigida al depositario. La denuncia podrá limitarse a ciertas unidades territoriales a las que se aplique el Convenio.

2. La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un periodo de doce meses después de la fecha de recepción de la notificación por el depositario. En caso de que en la notificación se fije un período más largo

para que la denuncia surta efecto, éste tendrá efecto cuando transcurra dicho período.

Artículo 63

El depositario notificará a los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado así como a los Estados que se hayan adherido de conformidad con las disposiciones del artículo 58:

a) las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que se refiere el artículo 57;

b) las adhesiones y las objeciones a las adhesiones a que se refiere el artículo 58;

c) la fecha en la que el Convenio entrará en vigor de conformidad con las disposiciones del artículo 61;

d) las declaraciones a que se refieren los artículos 34, apartado 2, y 59;

e) los acuerdos a que se refiere el artículo 39;

f) las reservas a que se refieren los artículos 54, apartado 2, y 55 y el retiro de las reservas prevista en el artículo 60, apartado 2;

g) las denuncias a que se refiere el artículo 62.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Convenio.

Hecho en La Haya, el 19 de octubre de 1996, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno del Reino de los Países Bajos y del cual se remitirá por vía diplomática una copia auténtica a cada uno de los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de celebrarse su Decimoctava Sesión.”

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los cuatro días del mes de noviembre del dos mil quince.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA

Manuel A. González Sanz
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

2 de diciembre de 2015

NOTA: **Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior.**

Este texto es copia fiel del expediente N.º 19.806. Se respetan literalmente la ortografía, el formato y la puntuación del original, según lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su resolución N.º 2001-01508, de las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos de 23 de febrero de 2001.